



Asamblea General

Distr. general
21 de diciembre de 2015
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

31^{er} período de sesiones

Temas 2 y 3 de la agenda

**Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
del Alto Comisionado y del Secretario General**

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Resultado de la mesa redonda sobre un enfoque basado en los derechos humanos para la buena gestión de la función pública

**Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos**

Resumen

En este informe, que se presenta de conformidad con lo solicitado en la resolución 25/8 del Consejo de Derechos Humanos, se ofrece un resumen de una mesa redonda sobre un enfoque basado en los derechos humanos para la buena gestión de la función pública que tuvo lugar el 24 de septiembre de 2015, durante el 30^o período de sesiones del Consejo.



I. Introducción

1. De conformidad con lo dispuesto en su resolución 25/8, el Consejo de Derechos Humanos celebró una mesa redonda sobre un enfoque basado en los derechos humanos para la buena gestión de la función pública el 24 de septiembre de 2015, durante su 30º período de sesiones.

2. El objetivo cuádruple de la mesa redonda era: a) intercambiar puntos de vista sobre el papel de la función pública en la promoción y protección de los derechos humanos; b) determinar los desafíos y compartir las buenas prácticas con respecto a un enfoque basado en los derechos humanos para la buena gestión de la función pública; c) analizar las conclusiones del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el papel de la función pública como componente esencial de la buena gestión pública en la promoción y protección de los derechos humanos (A/HRC/25/27); y d) promover una mejor comprensión de las reglas y normas internacionales de derechos humanos que se relacionan con la función pública.

3. La mesa redonda fue dirigida por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos y moderada por Anne Peters, Directora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. El Director de la División de Tratados de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), pronunció una declaración de apertura. Los panelistas fueron: Adetokunbo Mumuni, Director Ejecutivo del Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas de Nigeria; Kim Taekyoon, Profesor de Desarrollo Internacional de la Escuela Superior de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Seúl; Safak Pavey, miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, y Presidenta Adjunta y miembro de la Gran Asamblea Nacional de Turquía; Mariana González Guyer, Directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensora del Pueblo del Uruguay; y Jan Pastwa, Director de la Escuela Nacional de Administración Pública de Polonia¹.

II. Apertura de la mesa redonda

4. En su declaración de apertura, el Director de la División de Tratados de Derechos Humanos señaló que la buena gestión en todos los aspectos de la esfera pública era una misión básica de cada Estado. Los derechos humanos y la buena gestión estaban intrínsecamente interrelacionados y eran interdependientes. Un enfoque de la buena gestión basado en los derechos humanos exigía que los Estados garantizaran la no discriminación y la igualdad en la prestación de los servicios públicos. La buena gestión era también un fuerte impulsor de la confianza pública, la paz y el desarrollo sostenible. Cuando los procesos y mecanismos del Estado eran transparentes, rendían cuentas a la población, funcionaban de manera eficiente y eficaz y respetaban el estado de derecho, se reforzaba la confianza pública, disminuían las reclamaciones públicas, aumentaba el bienestar público, y mejoraba el progreso económico y social.

5. Sin embargo, múltiples problemas seguían dificultando la buena gestión, entre ellos las políticas de austeridad, la privatización descontrolada, la corrupción, los conflictos y la violencia. La falta de servicios públicos importantes o las mermas en su

¹ Se puede acceder a la transmisión web de la mesa redonda en la dirección <http://webtv.un.org/search/panel-discussion-on-human-rights-based-approach-to-good-governance-23rd-meeting-30th-regular-session-of-human-rights-council/4505293520001?term=good%20governance> (consultada el 21 de diciembre de 2015).

calidad se traducían en la pérdida de legitimidad, en la incapacidad de sostener el desarrollo, y en conflicto social, inseguridad y migraciones. En los esfuerzos por lograr una buena gestión se debían tener en cuenta las obligaciones de derechos humanos, y principios fundamentales tales como la no discriminación, la participación y la rendición de cuentas. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos habían proporcionado orientaciones para la buena gestión; por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general núm. 12 (1999) sobre el derecho a la alimentación, había afirmado que “[era] esencial un buen gobierno para la realización de los derechos humanos, incluida la eliminación de la pobreza, y para asegurar medios de vida satisfactorios para todos”.

6. La tendencia creciente a la privatización de los servicios públicos podía tener consecuencias negativas para los derechos humanos. Se hizo referencia a un informe reciente del Relator Especial sobre el derecho a la educación (A/HRC/29/30), que describía cómo la apertura del sector de la educación a la privatización y la comercialización podía dar lugar a la incapacidad de garantizar el acceso universal a la educación y socavar el derecho a la educación. Por consiguiente, cuando los servicios públicos se privatizaban o se prestaban mediante alianzas público-privadas, los Estados debían garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y establecer mecanismos efectivos de control de la calidad, rendición de cuentas y vigilancia.

III. Resumen de las deliberaciones

7. En sus observaciones de apertura, la Sra. Peters presentó a los panelistas. Hizo referencia al informe del ACNUDH sobre el papel de la función pública como componente esencial de la buena gestión pública en la promoción y protección de los derechos humanos (A/HRC/25/27) y señaló que la mesa redonda se había inspirado en la idea de que el análisis de la función pública desde la perspectiva de los derechos humanos podía producir beneficios en relación con las políticas. Reafirmó los vínculos entre los derechos humanos y una función pública bien gestionada, que se reforzaban mutuamente. Los derechos humanos de los ciudadanos comunes podían verse afectados cuando interactuaban con la función pública de su Estado o de su región. Los derechos humanos de los funcionarios públicos también estaban en juego, en particular su derecho a ser seleccionados, contratados y ascendidos sin discriminación; solo los funcionarios públicos que percibieran una remuneración adecuada y cuyos derechos humanos fueran respetados tendrían la disposición y la capacidad necesarias para realizar sus tareas sin caer en la corrupción.

8. La moderadora explicó que los términos “función pública” y “administración pública” se utilizaban indistintamente para referirse a todo el aparato financiado por el presupuesto estatal que tenía a su cargo la ejecución de las funciones del Estado por las diferentes ramas del gobierno, a saber, el proceso legislativo, la aplicación de las leyes y, por último, el control de su cumplimiento. A lo largo de la historia, diferentes culturas y sistemas políticos habían tenido, y seguían teniendo, opiniones divergentes acerca de las funciones que el Estado debía cumplir y del nivel de intensidad y el grado de prioridad con que debía hacerlo. Por consiguiente, el análisis de lo que pertenecía a la “función pública” podía dividirse en las siguientes subpreguntas: a) qué debía hacerse en el interés general de una sociedad determinada (“para” la población); b) si debían hacerlo instituciones financiadas y establecidas directa o indirectamente por la población; y c) qué servicios deberían ser “públicos”, en lugar de permanecer la esfera privada, individual y empresarial. Las opciones políticas elegidas por los Estados iban desde un Estado y una administración pública con funciones reducidas al mínimo, en un extremo, hasta un Estado de bienestar más amplio y completo, en el otro.

9. La perspectiva de los derechos humanos era útil para determinar el contenido sustantivo de los servicios públicos, así como el proceso a través del cual debían ofrecerse. Un Estado que hubiera ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, era responsable en última instancia de ofrecer algún tipo de sistema de salud para hacer efectivo el derecho a la salud. Si bien ello no prohibía la privatización del sistema de salud, el Estado estaba obligado a ser el garante final del derecho en cuestión. En general se consideraba que la buena gestión abarcaba la transparencia, la rendición de cuentas, la apertura y la participación²; así como la integridad, la no discriminación, la igualdad, la eficiencia y la competencia³; y la capacidad de respuesta a las necesidades de la población⁴. Habida cuenta de la superposición parcial de esos elementos, se había sugerido que se incorporaran en la fórmula en tres partes establecida en la Convención de Aarhus de 1998 sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (a saber, la transparencia, la participación y el acceso a la justicia)⁵. El examen de estos tres pilares desde la perspectiva de los derechos humanos podía contribuir a llenar los elementos de un contenido adaptable a diferentes contextos y culturas.

10. La moderadora invitó a los panelistas a que hicieran sus exposiciones.

A. Contribuciones de los panelistas

11. El Sr. Mumuni se centró en dos cuestiones: en primer lugar, en el papel que desempeñaban las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la incoación de acciones judiciales en los casos en que las instituciones de lucha contra la corrupción no lograban hacerlo; y en segundo lugar, en las iniciativas en pro del establecimiento de un tribunal internacional de lucha contra la corrupción para juzgar los casos de corrupción en gran escala y facilitar la devolución de los fondos robados a los Estados afectados.

12. Las ONG podían desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la corrupción velando por la aplicación efectiva de la legislación correspondiente y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y apremiando a las instituciones de lucha contra la corrupción, mediante acciones judiciales, a investigar y enjuiciar los casos de corrupción para evitar conductas indebidas en el futuro. Además, podían colaborar en actividades de prevención, por ejemplo, persuadiendo a los gobiernos de la necesidad de promulgar legislación, con inclusión de leyes de protección de los denunciantes. Visto que la corrupción en gran escala (y la impunidad de los responsables) era perjudicial para el interés público, las ONG también podían iniciar “litigios de interés público” para investigar los casos de corrupción de los que las instituciones de lucha contra la corrupción no se hubieran encargado o que de otro modo no fueran a ser objeto de escrutinio. Por lo tanto, era importante suavizar los requisitos relativos al derecho a comparecer ante la justicia y alentar a los tribunales a aceptar litigios de interés público y demandas colectivas en los casos de corrupción. Además de la necesidad de un entorno jurídico y judicial propicio, se señaló que las ONG debían adquirir las competencias y los recursos necesarios para hacer un uso eficaz de los litigios de interés público.

² Resolución 25/8 del Consejo de Derechos Humanos.

³ Resolución 19/20 del Consejo de Derechos Humanos.

⁴ Resolución 2000/64 de la Comisión de Derechos Humanos.

⁵ Reunión de las Partes en la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, decisión II/4 sobre el fomento de la aplicación de los principios de la Convención de Aarhus en los foros internacionales (ECE/MP.PP/2005/2/Add.5).

13. El panelista sugirió que el establecimiento de un tribunal internacional contra la corrupción permitiría investigar las denuncias de corrupción en gran escala. Se observó que, en un contexto en el que muchos habían dejado de confiar en la capacidad de los tribunales nacionales y los gobiernos para luchar contra la corrupción en gran escala, un tribunal internacional contra la corrupción podía echar por tierra la cultura generalizada de impunidad y solucionar los problemas que impedían la devolución efectiva de los activos robados a los Estados afectados. La corrupción en gran escala constituía un problema complejo que provocaba un profundo sufrimiento humano y requería soluciones innovadoras. Se trazó un paralelismo con la Corte Penal Internacional y se observó que su trayectoria daba pie a la esperanza de que pudiera establecerse un tribunal contra la corrupción que funcionase adecuadamente.

14. El Sr. Taekyoon abundó en los vínculos entre la buena gestión y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos iban más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que no habían incluido aspectos significativos de la gestión pública. Recordando la resolución 25/8 del Consejo, el panelista señaló que el fortalecimiento de las buenas prácticas de gestión pública en todos los niveles era un requisito indispensable para la plena efectividad de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.

15. A pesar de que la buena gestión era esencial para lograr buenos resultados en materia de desarrollo, no quedaba claro de qué modo podía o debía reflejarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo Después de 2015 del Secretario General había argumentado que lo más acertado era incluir la buena gestión como un objetivo independiente⁶. Sin embargo, un enfoque alternativo consistía en integrarla en los objetivos referentes a cuestiones específicas. Otra opción era vincular las consideraciones sobre la gestión pública a cuestiones relativas a los “medios de aplicación” y a la financiación del desarrollo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, posiblemente como un conjunto de principios o directrices para la articulación de esos “medios”. La buena gestión guardaba una estrecha relación con el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, que hacía referencia, entre otras cosas, a la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

16. La buena gestión se había convertido en una expresión controvertida debido a su utilización en el ámbito de la asistencia internacional para el desarrollo. Preocupaba a los países en desarrollo que las metas y los indicadores de buena gestión se utilizaran como condicionantes de la ayuda. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible podían considerarse una oportunidad para establecer de manera creativa nuevas metas e indicadores que tuvieran en cuenta tales preocupaciones. El hecho de que la comunidad internacional hubiese establecido principios comunes permitiría que la selección de las metas y los indicadores se realizara en función del contexto nacional y local. La lógica de la buena gestión debía adaptarse a los diferentes ritmos y modalidades de desarrollo de los países en desarrollo.

17. La Sra. Pavey se refirió a las principales dificultades para aplicar la agenda de la buena gestión en el plano nacional. Señaló la brecha existente entre la ratificación de los tratados de derechos humanos y su aplicación a nivel nacional, y citó varios ejemplos. Las culturas dominantes y firmemente arraigadas podían impedir la integración efectiva de las normas internacionales en los planos nacional y local. Si bien había casos en que se aprobaban reformas para complacer a la opinión pública internacional, las autoridades políticas de determinados países permitían la

⁶ “Una Nueva Alianza Mundial: Erradicar la Pobreza y Transformar las Economías a través del Desarrollo Sostenible. Informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015”. Disponible en: www.post2015hlp.org/the-report (consultado el 21 de diciembre de 2015).

persistencia de malas prácticas y de políticas inadecuadas. Se observó que, cuando la tradición estaba en desacuerdo con los derechos humanos, debía relegarse a un segundo plano para proteger los derechos y las libertades.

18. La Sra. González Guyer explicó en detalle los desafíos y las deficiencias de la buena gestión desde una perspectiva de género. Señaló que el enfoque de género era inherente a la perspectiva de los derechos humanos, y que era importante incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las diferentes dimensiones de la gestión pública, y dejar atrás, al mismo tiempo, la percepción de las mujeres como un grupo vulnerable. La modificación de las percepciones de género sobre la base de la buena gestión y de la función pública, los esfuerzos por garantizar la igualdad de trato de hombres y mujeres, y los progresos en el acceso a los derechos y en su disfrute planteaban desafíos, pero también oportunidades. El acceso a los servicios públicos era esencial, pero no suficiente, para garantizar que las mujeres disfrutaran plenamente de todos los derechos humanos.

19. Las instituciones eran un elemento y una consecuencia de una brecha de género más amplia, que impregnaba sus leyes y normas, sus características, sus prácticas administrativas, los mecanismos oficiales y la determinación de los cargos ocupados por mujeres y hombres. Por lo tanto, era necesario examinar las prácticas discriminatorias en las instituciones gubernamentales. No se habían realizado suficientes estudios teóricos o empíricos sobre la relación entre el género y la gestión pública. La mujer había transformado los procesos de gestión pública mediante su participación en diferentes instituciones del Estado, en los niveles ejecutivo, legislativo y judicial, y en las organizaciones de la sociedad civil. Desde el comienzo del siglo, se había prestado especial atención a la participación de la mujer en el diseño de nuevos sistemas de gestión pública, un factor decisivo para fomentar la buena gestión. Si la buena gestión y la función pública hacían caso omiso de las desigualdades de género, no garantizarían una auténtica participación ciudadana ni los principios fundamentales de rendición de cuentas, no discriminación, igualdad, transparencia, acceso a la información y exigibilidad de los derechos.

20. El Sr. Pastwa se refirió a las posibilidades y los límites de la legislación en lo referente a la buena gestión en la administración pública. Indicó que la existencia de legislación era una condición indispensable, pero que no bastaba por sí sola para que la administración pública de un Estado pudiera garantizar la efectividad y la promoción de los derechos humanos. La idea de aplicar un enfoque de la buena gestión basado en los derechos humanos ofrecía la posibilidad de un cambio real. Se hizo referencia a las 21 peticiones formuladas por los trabajadores del astillero de Gdansk en agosto de 1980, en que se había solicitado que todos los ciudadanos gozaran de los mismos derechos a acceder a cargos públicos y se había exigido un gobierno abierto y accesible que liderara el país y realizara cambios efectivos en la vida de los ciudadanos. La concienciación de los funcionarios públicos y su actitud positiva eran factores decisivos, sin los cuales la legislación no sería suficiente. Los derechos humanos eran una buena base para cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos, que debían pasar de un “enfoque profesional frío”, consistente únicamente en gestionar los problemas, a un “enfoque profesional cercano”, centrado en atender a las personas y en comprender y satisfacer sus aspiraciones.

B. Debate interactivo

21. En el curso de las deliberaciones hubo dos rondas de preguntas y respuestas e hicieron uso de la palabra los representantes de los siguientes Estados y organizaciones: Argelia (también en nombre del Grupo Africano), Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, China, Colombia, Ecuador, Egipto,

Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Georgia, Ghana, India, Irán (República Islámica del), Irlanda, Marruecos (también en nombre de la Organización Internacional de la Francofonía), Montenegro, Namibia, Pakistán (en nombre de la Organización de Cooperación Islámica), Polonia (en nombre del grupo de patrocinadores principales de la resolución 25/8 del Consejo de Derechos Humanos), Qatar, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Túnez, Turquía y Unión Europea. También hicieron uso de la palabra representantes de las siguientes ONG: Africa Speaks, Agence pour les Droits de l'Homme, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain, Commission arabe des droits humains, Global Network for Rights and Development, Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, e Institut International pour la Paix, la Justice et les Droits de l'Homme.

22. Los oradores destacaron los vínculos entre la buena gestión pública y los derechos humanos y subrayaron la importancia de potenciar la buena gestión en todos los niveles, incluidas las organizaciones internacionales. Muchos delegados presentaron y dieron a conocer las iniciativas y las mejores prácticas de sus países para mejorar la gestión y los servicios públicos, en particular la reforma de sus sectores judicial y administrativo, garantizar la transparencia y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones, la inclusión de los derechos humanos en los planes de estudios y los programas de capacitación de la policía y la judicatura, las iniciativas de gobierno electrónico, la inversión en servicios como la atención de salud, la educación y la vivienda, así como la labor de lucha contra la corrupción. Uno de los elementos fundamentales de la buena gestión era la existencia de servicios públicos profesionales, responsables y transparentes que defendieran los más altos niveles de eficiencia, competencia e integridad. Los principios y normas de la buena gestión de los servicios públicos constituían un mecanismo preventivo contra numerosas formas de corrupción. Los delegados señalaron que los grupos con acceso limitado a los servicios públicos, en particular los niños, los ancianos y las personas con discapacidad, las minorías y, en algunos casos, las mujeres, necesitaban atención especial, con miras a velar por que no se menoscabaran sus derechos humanos.

23. Se destacó que los principios de la imparcialidad, el estado de derecho y la lucha contra la corrupción eran fundamentales para lograr la buena gestión pública y para crear capital humano y hacer realidad el derecho al desarrollo. Los delegados reconocieron que debían consolidarse las buenas prácticas en los planos nacional, regional e internacional. La aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos para la buena gestión pública constituía un desafío mundial. Una delegación mencionó el sistema de prestación de ayuda, que con frecuencia se caracterizaba por la condicionalidad y, por lo tanto, no era considerado útil por los países interesados. Algunas delegaciones expusieron la labor realizada en el plano nacional para promover la buena gestión y aumentar la participación ciudadana en la administración pública, entre otras cosas mediante las instituciones nacionales de derechos humanos y los ombudsmen, la legislación nacional, los planes de acción nacional y las iniciativas de gestión electrónica. También se describió la participación en los esfuerzos internacionales, en particular por conducto de las Naciones Unidas, así como de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Además, los delegados hicieron hincapié en la importancia de velar por la buena gestión en la labor de las organizaciones internacionales. Un orador subrayó la necesidad de que los Estados movilizaran recursos suficientes para dar efectividad a los derechos del niño, por ejemplo mediante la tributación, y para dar prioridad al interés superior del niño en todos los procesos de adopción de decisiones.

24. Los delegados reiteraron que el enfoque de derechos humanos era fundamental en la prestación de servicios públicos. Se señaló que la gestión ineficaz de los asuntos públicos era el núcleo de las dificultades del desarrollo, y que daba lugar al

despilfarro, la corrupción y la disminución de la confianza de las empresas. Se plantearon preguntas sobre la función de la administración pública en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre la forma en que la agenda para el desarrollo después de 2015 podía fomentar la aplicación sistemática del enfoque basado en los derechos humanos para la prestación de servicios públicos.

C. Respuestas de los panelistas

25. El Sr. Pastwa se refirió al logro de la buena gestión en la administración pública e hizo hincapié en la necesidad de adaptar las medidas que debían tomarse para alcanzar los objetivos. Un enfoque pragmático de la buena gestión pública requería un marco jurídico y un presupuesto adecuados, junto con suficiente capacidad de liderazgo por parte de los que intervenían en su aplicación. Era importante dar buenos ejemplos y determinar e intercambiar las buenas prácticas. En lo que respecta a la función de la administración pública en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda para el desarrollo después de 2015, sostuvo que la función pública se podía abrir a los interesados externos e invitarlos a participar ampliamente en la gestión y en la formulación de políticas, teniendo presente también el volumen de las cuestiones planteadas en el Objetivo 16. Esos interesados podían asimismo fortalecer las alianzas en este proceso. Los Estados debían velar por el acceso a la justicia proporcionando los medios presupuestarios, organizativos y técnicos necesarios. Era preciso impartir formación a los funcionarios públicos, y se debía informar a los ciudadanos sobre la forma de ejercer sus derechos. Se hizo hincapié en que el aumento de la transparencia y del acceso a la información era una inversión inestimable y requería un presupuesto adecuado. Se recomendó el uso de los medios digitales para reducir considerablemente los costos a este respecto. Debían darse ejemplos prácticos del daño que la corrupción causaba a las personas y a la sociedad. También era importante capacitar a los funcionarios públicos sobre la forma de romper el círculo vicioso de la corrupción y evitar una cultura institucional corrupta.

26. El Sr. Mumuni abordó la cuestión de cómo prevenir la corrupción y el desvío de fondos públicos por funcionarios de alto nivel. La corrupción en gran escala indicaba que era necesario establecer un tribunal internacional contra la corrupción para tratar los casos de corrupción que los tribunales nacionales se resistían a resolver, o eran incapaces de hacerlo. Ese tribunal tendría un efecto disuasivo en quienes quisieran valerse de un cargo público para el enriquecimiento personal. El Sr. Mumuni expuso su opinión sobre la forma de lograr que la administración pública respondiera mejor a los intereses generales de los ciudadanos. Se reconoció que, en determinadas circunstancias, la corrupción era el motivo principal que privaba a las personas de los beneficios de la función pública, y que en los casos de infracción debían hacerse cumplir las normas aplicables a los funcionarios públicos de modo estricto e imparcial. Contrariamente a la idea de que la falta de voluntad política era el motivo de la ineficaz promoción y protección de los derechos humanos, se precisaban instituciones fuertes para garantizar que nadie, fueran cuales fueren sus atribuciones, pudiera subvertir el sistema.

27. El Sr. Taekyoon se refirió a la forma de fomentar las sinergias entre las instituciones financieras internacionales y las Naciones Unidas en relación con las políticas para la buena gestión y la administración pública. Las sinergias podían aumentarse mediante un memorando común que estableciera los niveles más altos de servicios públicos e incrementara el intercambio de información y de las mejores prácticas. El orador formuló observaciones sobre las cuestiones relativas a la creación de un entorno internacional favorable a la mejora del servicio público y sobre los mecanismos internacionales concretos para prestar asistencia a los países con

limitaciones económicas. Se señaló que la financiación para el desarrollo era decisiva para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de otros objetivos internacionales de desarrollo en los países receptores. En este contexto se mencionaron tres niveles distintos de apoyo: a) la reforma del sistema tributario nacional para dar acceso a fondos ocultos que de otro modo eran controlados por el sector no estructurado, y habilitar a los ciudadanos para que exigieran a los gobiernos la rendición de cuentas sobre la forma en que se gastaban los impuestos; b) el nivel internacional, mediante la asistencia oficial para el desarrollo y la inversión extranjera directa; y c) las soluciones innovadoras, como un impuesto de solidaridad.

28. La Sra. González Guyer respondió a una pregunta sobre la forma en que el Consejo de Derechos Humanos podría fomentar aún más la buena gestión de la función pública. Señaló varias vías, por ejemplo, el examen periódico universal y el seguimiento de las recomendaciones de los órganos de tratados, mediante los cuales el Consejo podía ejercer su influencia. También las instituciones nacionales de derechos humanos tenían un papel importante que desempeñar al respecto, dada su condición de entidades públicas, pero autónomas. Por consiguiente, esas instituciones debían reforzarse y debían cooperar estrechamente con la sociedad civil para aumentar su eficacia. Las instituciones nacionales de derechos humanos eran un mecanismo de supervisión que velaba por que el Estado respetara los derechos humanos y podía también preparar informes independientes para los distintos órganos de tratados. Además, estas instituciones y los ombudsmen podían contribuir al establecimiento de normas en el plano internacional, y a la vez hacer cumplir las normas en el plano nacional. En cuanto al papel de las empresas privadas en la gestión pública, era necesario prestar especial atención al aumento de la tendencia a la privatización de los servicios públicos, como el agua, la educación y la salud. El Estado debía desempeñar la función de garante y tenía la responsabilidad última del respeto de todos los derechos humanos. Se destacó el potencial del gobierno electrónico y de las nuevas tecnologías en lo referente al ejercicio y la supervisión de los derechos humanos, en particular en cuanto al acceso a la información. No obstante, se insistió en que el gobierno electrónico y el acceso a la información no bastaban por sí mismos para garantizar un enfoque de derechos humanos.

29. La Sra. Pavey describió a grandes rasgos las dificultades más frecuentes derivadas de la externalización de los servicios públicos y destacó la necesidad de una mayor transparencia en la concepción de las políticas públicas. La austeridad y la privatización habían redefinido las funciones, y la economía de mercado había traído consigo nuevos valores y políticas que habían pasado a formar parte de la política oficial en muchos países. Así pues, era preciso invertir en una transformación cultural más que en un mero cambio legislativo. En respuesta a la pregunta sobre el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos y su participación en estos, la oradora señaló que el principio fundamental de derechos humanos de la no discriminación era esencial para la buena gestión; los servicios públicos debían ser inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad. Se mencionó que la resistencia de la cultura dominante era como uno de los motivos principales del limitado acceso y la escasa participación. En los países con gran densidad de población, la falta de recursos creaba más resistencia a compartir los servicios entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. En este contexto se destacó la importancia de la educación, la sensibilización, la formación de los funcionarios públicos y el intercambio de las mejores prácticas.

IV. Conclusiones

30. Al resumir el debate, la moderadora señaló que las deliberaciones de la mesa redonda habían ilustrado la necesidad de luchar contra la corrupción y de fortalecer la transparencia y el intercambio de información. Se habían definido los elementos necesarios para mejorar la gestión en la administración pública: a) en el plano internacional, aplicando los instrumentos y mecanismos de derechos humanos y basándose en las recomendaciones y orientaciones de los procedimientos especiales y los órganos de tratados, así como en las directrices para la presentación de informes por los Estados y el examen periódico universal; y b) en el plano nacional, mejorando la transparencia y el acceso a la información y los documentos oficiales para empoderar a los ciudadanos como fiscalizadores de una función pública eficaz.
